

INFORMARTIVO DE RELATORIA

JULIO 2023

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA



Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussan Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello	Acción de Tutela 76001-23-33-000-2022-00938-01 Sentencia del 15 de junio de 2023
<p>La Subsección conoció impugnación propuesta por el Centro Penitenciario y Carcelario EPMSC Sevilla (Valle del Cauca) en contra de fallo en el que se tuteló el derecho fundamental de petición de internos del patio No. 02 del centro carcelario San Luis de Sevilla de Valle del Cauca ordenando resolver sobre diferentes solicitudes al Establecimiento Penitenciario.</p> <p>Aun cuando la impugnación versó únicamente sobre lo relativo al derecho de petición, la Sala decidió efectuar un análisis más amplio según los argumentos expuestos por los accionantes en el escrito de tutela sobre variedad de problemáticas, y en atención al estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria decretado por la Corte Constitucional.</p> <p>Por consiguiente, la Sala revocó la decisión de primera instancia, amparó los derechos fundamentales a la salud y seguridad e integridad personal de la población privada de la libertad recluida en el Centro Penitenciario y Carcelario EPMSC Sevilla, amenazados por las condiciones de humedad de dicho establecimiento; y entre otras, ordenó la realización por la Defensoría del Pueblo una visita de inspección, a fin de efectuar un diagnóstico sobre el estado de alimentación y ejecución de proyectos de estudio y trabajo para lograr el fin resocializador de la pena en el Centro Penitenciario y Carcelario EPMSC Sevilla. Y a partir del mismo, ordenó al USPEC, al INPEC y al Centro Penitenciario y Carcelario EPMSC Sevilla, a fin de que, dentro del ámbito de sus competencias, implementen las acciones de mejoramiento sugeridas.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar	Nulidad 11001032500020180113800 (4014-2018) Auto del 11 de julio de 2023
<p>El Consejero resolvió revocar el auto del 7 de julio de 2021 que decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto del 22 de abril de 2014 <i>"por medio de la cual se decide sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados del Ministerio de Defensa – Secretaría General – Dirección Administrativa – Grupo de Prestaciones Sociales"</i>.</p> <p>Consideró que si bien, de la confrontación inicial del acta acusada con el acto legislativo 01 de 2005 se podía concluir válida y razonablemente que transgredía el inciso 8 de la norma en comento; se encuentran escenarios y contextos normativos,</p>	

hermenéuticos y facticos adicionales, tales como el concerniente a la determinación de la verdadera intención, propósito o finalidad del constituyente derivado al expedir el Acto Legislativo 01 de 2005, en punto a la exclusión del régimen de la Fuerza Pública, o el atinente a la definición de los destinatarios del acta demandada.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<p>Consejo de Estado</p> <p>Sala de lo Contencioso Administrativo</p> <p>Sección Segunda</p> <p>Subsección B</p> <p>C.P. Carmelo Perdomo Cuéter</p>	<p>Nulidad y Restablecimiento del Derecho</p> <p>17001-23-33-000-2015-00209-01 (2323-2021)</p> <p>Sentencia del 13 de abril de 2023</p>
<p>La Sala al decidir recurso de apelación revocó sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda de nulidad de decisión disciplinaria que sancionó al demandante con suspensión e inhabilidad especial por el término de seis meses mientras ejercía el cargo de patrullero, por cuanto después de trasladar a un detenido y quitarle las esposas y agacharse para soltarle los cordones, recibió un puntapié del aprehendido quien se fugó.</p> <p>Destaca la Sala, que no resulta razonable la posición de la parte demandante y del Tribunal, al aducir que por el hecho de que no se tenga asignada, expresamente, la función de custodio de un detenido, sino la de conductor, no debía responder por la omisión que dio lugar a su fuga, sino que al asumir en forma voluntaria la carga de cumplir la misión de entrega del retenido, y al permitir con su descuido o negligencia que se fugara la persona que estaba bajo su custodia, dio lugar a que se le imputara y sancionara por el tipo disciplinario culposo del artículo 34 (numeral 2) de la ley 1015 de 2006.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<p>Consejo de Estado</p> <p>Sala de lo Contencioso Administrativo</p> <p>Sección Segunda</p> <p>Subsección B</p> <p>C.P. César Palomino Cortés</p>	<p>Nulidad y Restablecimiento del Derecho</p> <p>54001-23-33-000-2017-00245-01 (6142-2019)</p> <p>Sentencia del 19 de enero de 2023</p>
<p>La Subsección al resolver recurso de apelación confirmó sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que negó las súplicas de la demanda, con la que la Unidad Administrativa Especial de Gestión</p>	

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP en la modalidad de acción de lesividad pretendía la declaratoria de nulidad del acto administrativo que reconoció y ordenó pagar pensión de sobrevivientes a la pareja del mismo sexo, ante la existencia de sentencia de la jurisdicción de familia que negó la declaratoria de la unión marital de hecho.

Concluyó la Sala que las decisiones proferidas por los jueces en el marco de los procesos ordinarios adoptados en las distintas jurisdicciones, no son concluyentes ni determinantes para las decisiones proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en sede del control de legalidad, siendo dable el distanciamiento frente a dichos pronunciamientos, con fundamento en la libre apreciación probatoria a la luz de la sana crítica que conforman la lógica y la experiencia.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<p>Consejo de Estado</p> <p>Sala de lo Contencioso Administrativo</p> <p>Sección Tercera</p> <p>Subsección B</p> <p>C.P. Martín Bermúdez Muñoz</p>	<p>Reparación Directa</p> <p>76001233100020050029203 (51864)</p> <p>Sentencia del 25 de mayo de 2023</p>
<p>La Sección modificó sentencia en lo referente al monto de la indemnización reconocida, dictada por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que condenó a Empresas Públicas de Municipales de Cali – Emcali EICE ESP a reparar el daño causado por las lesiones sufridas por la demandante como consecuencia de una electrocución ocasionada por el contacto con una red eléctrica.</p> <p>Para la Corporación no se acreditó el hecho exclusivo de la víctima como causa extraña, ni que tuviera incidencia causal en el daño, al determinar que la red eléctrica estaba con la que entró en contacto la menor estaba ubicada a una distancia que violaba la exigida por la reglamentación técnica vigente en la época de los hechos; y al no estar acreditado que el inmueble donde residían los demandantes hubiera sido construido con posterioridad a la instalación de las redes eléctricas.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<p>Consejo de Estado</p> <p>Sala de lo Contencioso Administrativo</p> <p>Sección Tercera</p> <p>Subsección B</p> <p>C.P. Alberto Montaña Plata</p>	<p>Controversias Contractuales</p> <p>25000-23-36-000-2013-00502-02 (67201)</p> <p>Sentencia del 25 de mayo de 2023</p>
<p>La Sección revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que negó las pretensiones de la demanda,</p>	

con la que se pretendía la nulidad absoluta de contrato No. 559 de 2012, así como el acto administrativo que justificó la celebración de una contratación directa entre Bogotá – Distrito Capital y Northbund Technologies S.A.

Para la Corporación, con las pruebas obrantes en el expediente, las razones que justificaron la contratación directa no obedecieron a verdaderas razones del mercado, sino a consideraciones desconocidas e injustificadas; por lo que había lugar a declarar la nulidad absoluta de un contrato administrativo por eludirse el procedimiento de licitación pública.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C C.P. Guillermo Sánchez Luque	Reparación Directa <u>25000-23-36-000-2017-00979-01</u> <u>(67712)</u> Sentencia del 14 de septiembre de 2023

La Sala confirmó sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda según la cual, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C habría incurrido en error jurisdiccional por desconocer la jurisprudencia aplicable.

La Corporación al desatar el recurso de apelación consideró que en la función de impartir justicia es natural que el juez rectifique su jurisprudencia al considerar que el nuevo criterio se ajusta mejor a los cánones interpretativos y permite la adaptación de las decisiones a los continuos cambios sociales.

Y que, por tanto, no se aprecia en la decisión judicial una actuación caprichosa o subjetiva del fallador, sino que lo pretendido en la demanda es la revisión de los fundamentos jurídicos de la providencia y su valoración probatoria.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A C.P. Marta Nubia Velásquez Rico	Controversias Contractuales <u>25000-23-36-000-2021-00249-01</u> <u>(68.996)</u> Sentencia del 2 de junio de 2023

La Subsección confirmó sentencia de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda con la que se pretendía la nulidad, por falta de competencia, del acto a través del

cual la UNGRD declaró incumplimiento parcial de contrato de compraventa e impuso multa al contratista.

El Alto Tribunal consideró que; el acuerdo entre las partes, consistente en que la facultad para adelantar el tramite sancionatorio encaminado a la imposición de las multas ante el incumplimiento del contratista, estaría en cabeza de la UNGRD; resulta procedente, por tratarse de una acuerdo expreso entre las partes, sin que se trate de una prerrogativa pública con las características y el alcance de las previstas en la ley 80 de 1993.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C C.P. Nicolás Yepes Corrales	Controversias Contractuales 73001-23-33-000-2017-00473-01 (67397) Sentencia del 16 de diciembre de 2022

La Subsección confirmó sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima que negó las pretensiones de la demanda con la que se solicitaba el reconocimiento de desequilibrio financiero de contrato de obra.

La Corporación recordó que tratándose de pretensiones fundadas en la mayor permanencia de obra le corresponde a la parte actora demostrar que la extensión del plazo del contrato le fue ajena y los supuestos del incumplimiento o de la atribución sin culpa, según el caso.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C C.P. Nicolás Yepes Corrales	Reparación Directa 13001233100020060152701 (51372) Sentencia del 16 de diciembre de 2022

La Subsección al decidir grado jurisdiccional de consulta, modificó sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda por las lesiones física sufridas por la demandante consistentes en quemaduras de segundo y tercer grado en su pie derecho cuando se manipulaba electrobisturí quirúrgico durante una intervención quirúrgica que se le practicó.

Adujo el Consejo de Estado que, aunque la responsabilidad por daños ocasionados en la prestación del servicio médico a cargo del Estado por regla general debe

abordarse bajo la óptica de la falla probada del servicio, la jurisprudencia ha advertido que, en algunos eventos, es posible predicar la existencia de un régimen objetivo de responsabilidad, como los casos de daños generados por la utilización de elementos que suponen peligro para el paciente como el “electrobisturí”.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<p>Consejo de Estado</p> <p>Sala de lo Contencioso Administrativo</p> <p>Sección Quinta</p> <p>C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil</p>	<p>Nulidad Electoral</p> <p>11001-03-28-000-2022-00023-00</p> <p>Sentencia del 11 de mayo de 2023</p>
<p>La Sala negó la nulidad del acto de nombramiento de una magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto:</p> <p>(i) si bien no se cumplió la publicación de la confirmación, ello no tiene incidencia para desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado;</p> <p>(ii) la disponibilidad presupuestal no es un requisito para la existencia o validez del acto de nombramiento de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia; y,</p> <p>(iii) que tanto el acto de nombramiento y su confirmación se ejecutaron cuando adquirieron firmeza.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<p>Corte Constitucional</p> <p>M.P. Natalia Ángel Cabo</p>	<p>Sentencia C-227 de 21 de junio de 2023</p>
<p>La Corporación declaró la exequibilidad del artículo 14 de la ley 100 de 1993 relacionado con el reajuste de pensiones según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor.</p> <p>Consideró la Corte que, el Congreso de la República actuó dentro de los límites del margen de configuración legislativa que tiene en la materia.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<p>Corte Constitucional</p> <p>M.P. Cristina Pardo Schilesinger</p>	<p>Sentencia C-260 de 12 de julio de 2023</p>
<p>La Sala Plena de la Corte declaró la exequibilidad condicionada de las expresiones “en alta voz” y “oirán” del artículo 1074 y el inciso primero del artículo 1081 del Código Civil en el entendido que las personas en situación de discapacidad podrán otorgar también testamentos abiertos y cerrados debiendo el notario disponer los ajustes razonables necesarios, proporcionar la asistencia y los apoyos requeridos para la realización del acto jurídico y respetar la validez de los apoyos formales previamente convenidos por la persona para el ejercicio de su capacidad jurídica o judicialmente asignados para ese fin.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Diana Fajardo Rivera	Sentencia SU – 269 de 2023 Comunicado No. 023
<p>La Corte amparó el derecho a la estabilidad laboral reforzada y al debido proceso de trabajadora con padecimiento de salud, que fue despedida sin mediar autorización legal.</p> <p>Consideró la Sala Plena, que la estabilidad laboral reforzada no deriva exclusivamente del contenido de la ley 361 de 1997, sino que encuentra soporte en otros derechos y principios fundamentales. Destacó, que de acuerdo al precedente (SU-049 de 2017 y SU-380 de 2021), las personas en condición de debilidad manifiesta por razones de salud que les impida o limite realizar sus actividades laborales como lo hacían habitualmente, cuentan con la garantía de no ser despedidos salvo que medie autorización de la oficina del trabajo.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo	Sentencia C-270 de 2023 Comunicado No. 023
<p>La Corte declaró la exequibilidad condicionada de la expresión <i>"para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación de la Entidad Promotora de Salud [...] la Administradora de Fondos de Pensiones otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador"</i>, contenida en el inciso quinto del artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que respecto de los trabajadores con concepto de rehabilitación desfavorable, la AFP deberá iniciar de inmediato el proceso de calificación de invalidez y asumir el pago del subsidio de incapacidad sin que exceda del día 540 de incapacidad.</p> <p>Así mismo, declaró la exequibilidad condicionada de la expresión <i>"[c]uando la Entidad Promotora de Salud no expida el concepto favorable de rehabilitación, si a ello hubiere lugar, deberá pagar un subsidio equivalente a la respectiva incapacidad temporal después de los ciento ochenta (180) días iniciales con cargo a sus propios recursos, hasta cuando se emita el correspondiente concepto"</i>, contenida en el inciso sexto del artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que la EPS deberá pagar el subsidio por incapacidad temporal desde el día 181, con cargo a sus propios recursos, hasta tanto emita el concepto que le corresponde, sea este uno de rehabilitación favorable o de rehabilitación desfavorable.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Cristina Pardo Schlesinger	Sentencia T-198 del 1 de junio de 2023
<p>La Corte analizó tutela presentada por una mujer en contra de Coosalud EPS y el Hospital San Juan de Dios de Cartago (Valle del Cauca) quien mencionó que el trato brindado al momento de su parto y posparto no fue el adecuado.</p> <p>La Sala consideró que la profesionalidad de una persona no solo se predica porque sus técnicas o procedimientos sean pertinentes efectivos y alcancen un fin, sino también juega un papel importante la integridad profesional, por lo que debe haber un trato digno, respetuoso y adecuado para las personas a quienes se les presta el servicio.</p> <p>Aunque el Tribunal Constitucional declaró la carencia actual del objeto por daño consumado, le ordenó al centro hospitalario que los profesionales reciban formación adecuada para la protección de los derechos de las mujeres que acuden a los servicios de salud reproductiva.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera	Sentencia T-161 del 17 de mayo de 2023
<p>El Máximo Tribunal Constitucional analizó los casos de dos menores de edad que padecen de autismo y retardo del desarrollo y retraso en el lenguaje respectivamente, cuyos padres solicitaron que Salud Total EPS cubriera los gastos de traslados de los menores para acceder a las terapias de fonoaudiología, neurología, pediatría y psiquiatría asignado por el médico tratante. En uno de los casos se solicitó, además, fueran solventado los traslados del menor y de su madre, quien actúa como su cuidadora.</p> <p>La Sala reiteró las reglas y subreglas jurisprudenciales en materia de derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes y de transporte intraurbano, especialmente, aquel requerido por los niños diagnosticados con algún déficit cognitivo. También que, si bien el servicio de transporte, en muchas ocasiones, es exclusivo para quienes presenten crónicas, aclaró que hay casos en los que se hacen extensivos a los familiares cercanos por la complejidad del estado de salud.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Diana Fajardo Rivera	Sentencia T-041 del 28 de febrero de 2023
<p>Un hombre indígena, su esposa y cinco hijos, pertenecientes a la comunidad Embera katío, presentaron demanda de reparación directa contra el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior por amputación de su pierna derecha y otras lesiones cuando una mina antipersonal explotó a pocos centímetros de él mientras realizaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos para la cual había sido contratado.</p> <p>Aunque en el año 2016 obtuvo una decisión favorable, en el año 2021 el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión considerando que la labor del ejército se realizó de manera adecuada y que el demandante asumió el riesgo al suscribir un contrato laboral como erradicador.</p> <p>La familia afectada acudió a la acción de tutela siendo negada en primera y segunda instancia por la Subsección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.</p> <p>La Sala primera de revisión de la Corte Constitucional, consideró que el Alto Tribunal incurrió en defectos fácticos y por desconocimiento del precedente.</p> <p>Sobre el defecto factico, por concluir el accionado, i) que no estaba probado el incumplimiento de los protocolos de seguridad por parte del Ejército; y ii) por interpretar que la suscripción del contrato como erradicador implicara que el empleado deba asumir todos los riesgos de esa actividad.</p> <p>También dijo la Corte, que la decisión del Tribunal se apartó del precedente del Consejo de Estado en la materia, según el cual el Estado colombiano sí debe responder frente a civiles cuando se dedican a la erradicación de cultivos ilícitos.</p> <p>La Sala de revisión resolvió revocar la sentencia de tutela, y ordenó que, en un plazo de un mes, dictara una nueva decisión acorde con el precedente y sin imponer la asunción del riesgo al accionante.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. José Fernando Reyes Cuartas	Sentencia T-143 del 5 de mayo de 2023
<p>La Sala Novena de Revisión de tutelas amparó los derechos fundamentales al cuidado al menor de edad, el debido proceso y a la igualdad de una pareja a la cual</p>	

no se le garantizó el reconocimiento de la licencia parental compartida (ley 2114 de 2021) por parte del Ministerio de Salud -entidad empleadora del accionante- y de la EPS Compensar -a la cual estaban afiliados ambos miembros de la pareja-.

Sobre los dos primeros derechos, consideró el Alto Tribunal que la negativa de reconocer la licencia fundada en la ausencia de regulación, no se trata de un argumento admisible para impedir el goce de derechos; y la exigencia de una reglamentación de la ley constituye un requisito no contemplado en la norma.

Sobre el derecho a la igualdad encontró que la interpretación del Ministerio de Salud a la ley 2114 de 2021, según la cual, excluye a los empleados públicos de la licencia parental compartida, es contraria a la Constitución.

La Sala revocó la sentencia de instancia, i) ordenó a la EPS Compensar adelantar todas las gestiones necesarias para reconocer y pagar la licencia parental compartida de los accionantes, ii) ordenó a la entidad empleadora a garantizar el goce de la licencia parental compartida del accionante, e iii) instó al Departamento Administrativo de la Función Pública para que expida la regulación de que trata el inciso 3 del párrafo 4 del artículo 2 de la ley 2114 de 2021 según las consideraciones de la providencia.

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. José Fernando Reyes Cuartas	Sentencia T – 200 del 2 de junio de 2023
<p>La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional negó el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud de una mujer de 58 años, quien se encuentra hospitalizada en la unidad de cuidados crónicos de la IPS Health & Life tras un diagnóstico de demencia frontotemporal degenerativa. La acción de tutela fue promovida por su cónyuge, quien argumentaba que su esposa requiere cuidados especiales y él debe trabajar para sufragar los gastos del hogar, sin que le sea posible brindar la atención domiciliaria que esta requiere.</p> <p>La Sala al revisar si la paciente requería los servicios de enfermería o de un cuidador domiciliario a cargo de la EPS, señaló que, atendiendo las circunstancias económicas, sociales y físicas del núcleo familiar, no era posible considerar que el cuidado de la agenciada representara una carga insostenible.</p> <p>Recordó la Corte, que, en algunas ocasiones, los ciudadanos deben asumir cargas inherentes y razonables, por ejemplo, ejercer el rol de cuidador cuando corresponda, en virtud del principio de solidaridad que sostiene el Estado Social de Derecho que nos rige.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Juan Carlos Cortés González	Sentencia T – 052 del 8 de marzo de 2023
<p>La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional conoció acción de tutela presentada por una adulta mayor que fue desvinculada del cargo que ocupaba en provisionalidad en una entidad estatal sin tener en cuenta su calidad de prepensionada.</p> <p>La Corporación encontró que la historia laboral de la demandante presentaba inconsistencias en relación con el número de semanas cotizadas a pensión y las reportadas en ella. En tal sentido, evidenció que las entidades accionadas incumplieron con su deber de validar y mantener actualizada la información relacionada con los aportes al sistema pensional. Dicha inexactitud impactó negativamente en el reconocimiento de la calidad de prepensionada de la accionante, por lo que la entidad estatal empleadora desconoció esa garantía que le confiere una estabilidad laboral reforzada.</p> <p>La Corte revocó las decisiones de instancia, y ordenó a COLPENSIONES y a la Secretaría de Educación Departamental de Putumayo (SED), que adelantaran de forma coordinada las gestiones a que hubiere lugar para validar y actualizar todos los aspectos concernientes con la historia laboral de la accionante.</p> <p>Así mismo ordenó a la entidad empleadora a vincular a la accionante a un cargo vacante como el que desempeñaba o uno con funciones similares o equivalentes a las que desarrollaba antes de la fecha en la que fue desvinculada y hasta que le sea reconocido el derecho a la pensión y se verifique su inclusión en nómina. Y en caso de no contar con vacantes disponibles, a la inclusión de la accionante en la lista de servidores con estabilidad laboral a ser reintegrados en cuanto la entidad cuente con vacantes.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa	STP5284-2023 CIU 11001023000020230033500 Radicación No. 129939 Fallo de tutela del 31 de mayo de 2023 Boletín Jurisprudencial julio de 2023

La Sala decidió acción de tutela interpuesta contra la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por la inadmisión de los accionantes en la fase II de la Convocatoria 27 (para provisión de funcionarios de la Rama Judicial) con sustento en la causal de rechazo prevista en el numeral 3.5. del artículo 3º del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, relacionada con el cargue en el aplicativo de inscripción, de declaración juramentada de no estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.

Determinó la Corte que, se configuró un exceso ritual manifiesto en relación con la carga impuesta a los participantes de la Convocatoria 27, dirigida a cumplir con el requisito de presentar una declaración de no hallarse incursos en incompatibilidades o inhabilidades. Lo anterior, por cuanto la entidad les exigió, suscribir una manifestación adicional y complementaria a la registrada al momento de seleccionar <aceptar> en el cuadro de diálogo desplegado en el aplicativo Kactus al momento de la inscripción, y en la fecha de aplicación de la prueba escrita, al ser refrendada en el cuadernillo de preguntas.

Así, la Corporación i) amparó los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, acceso a cargos públicos, trabajo e igualdad de los accionantes y por efecto *inter comunis*, de los demás excluidos en la Fase II de la etapa de selección de la Convocatoria 27 con sustento en el numeral 3.5 del artículo 3º del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, ii) dejó sin efecto los actos administrativos respecto de la causal de exclusión, y iii) ordenó a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, que emitiera un nuevo acto administrativo según las consideraciones expuestas y adelantara las gestiones necesarias para permitir que las personas favorecidas pudieran continuar con el concurso.